

MODEL A

Aquest examen consta de 110 preguntes ordinàries i avaluable (de la 1 a la 110), més 10 de reserva (de la 111 a la 120). Si el tribunal acorda l'eliminació d'alguna pregunta de les ordinàries i avaluable, serà substituïda per alguna de les de reserva, i en el mateix ordre.

Este examen consta de 110 preguntas ordinarias y evaluables (de la 1 a la 110), más 10 de reserva (de la 111 a la 120). Si el tribunal acuerda la eliminación de alguna pregunta de las ordinarias y evaluables, será sustituida por alguna de las de reserva, y en el mismo orden.

1. La regulación de la suspensión de los derechos y libertades constitucionales se encuentra:

- a) En el preámbulo de la Constitución.
- b) En el título preliminar de la Constitución.
- c) En el título primero de la Constitución.
- d) En el título segundo de la Constitución.

2. En relación a los deberes de los ciudadanos, el artículo 30 de la Constitución dispone:

- a) Que podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
- b) Que mediante una ley orgánica se regularán los deberes de los ciudadanos en caso de riesgo grave, catástrofe o calamidad pública.
- c) Que todas las personas tienen el deber de defender España.
- d) Que el servicio militar es obligatorio para todos los españoles mayores de edad.

3. Señale la respuesta correcta:

- a) El estatuto de autonomía, como norma institucional básica de cada comunidad autónoma, queda excluida del ordenamiento jurídico estatal.
- b) Los estatutos de autonomía deben contener los supuestos y requisitos para proceder a la federación de comunidades autónomas.
- c) La reforma de los estatutos requiere, en todo caso, la aprobación por ley ordinaria de las Cortes Generales.
- d) Los estatutos de autonomía deben contener la delimitación territorial autonómica.

4. Indique la respuesta incorrecta. La legislación básica estatal:

- a) Únicamente puede fijarse por ley de las Cortes Generales.
- b) Permite asegurar un mínimo común denominador normativo para todo el territorio del Estado cuando la naturaleza de la materia lo exija.
- c) Debe dejar margen para la competencia legislativa de desarrollo por parte de las comunidades autónomas.
- d) Debe declarar el alcance de lo que se considera básico.

5. Los magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados:

- a) Por los gobiernos autonómicos.
- b) Por la Comisión General de Comunidades Autónomas.
- c) Por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- d) Por la Conferencia de Presidentes.

6. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta:

- a) Para autorizar la prestación del consentimiento del Estado para obligarse mediante tratados o convenios internacionales.
- b) Para autorizar los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas.
- c) Para establecer la distribución de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial entre las comunidades autónomas.
- d) Para ejercer las competencias no legislativas que el título II atribuye a las Cortes Generales.

7. ¿Cuál es el plazo máximo para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo desde que se tiene conocimiento de los hechos objeto de la misma?

- a) Tres meses.
- b) Seis meses.
- c) Ocho meses
- d) Un año.

8. Indique la respuesta correcta:

- a) Los ministros sin cartera no tienen asignados medios materiales ni personales.
- b) Los ministros crean, modifican y suprimen las secretarías de Estado de sus respectivos departamentos.
- c) Los ministros son nombrados y separados por el presidente del Gobierno.
- d) Los ministros reciben el apoyo político y técnico de los gabinetes.

9. Indique la respuesta incorrecta. En las Illes Balears:

- a) Las islas y los municipios son entidades necesarias de la organización territorial de las Illes Balears.
- b) Existen, además de las islas y los municipios, entidades locales creadas al amparo de la legislación de régimen local.
- c) Hay una institución de gobierno provincial.
- d) Las instituciones de gobierno de las islas son los consejos insulares, y las de los municipios, los ayuntamientos.

10. La propuesta de reforma el Estatuto de autonomía requerirá, para prosperar, la aprobación del Parlamento balear por mayoría:

- a) De dos tercios de los diputados.
- b) De los miembros presentes en la votación.
- c) De tres quintos de los diputados.
- d) Absoluta de los diputados.

11. En el Parlamento balear, la constitución de los grupos parlamentarios se realizará:

- a) En la sesión constitutiva, tras la elección de la Mesa y la jura o promesa de acatar la Constitución por parte de los diputados electos.
- b) Dentro de los diez días siguientes a la sesión constitutiva
- c) Dentro del mes siguiente a la sesión constitutiva.
- d) Dentro de los dos meses siguientes a la sesión constitutiva.

12. En relación con el procedimiento legislativo en el Parlamento balear, las enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley:

- a) Podrán ser presentadas por diputados de forma individual.
- b) Tratan sobre la oportunidad, los principios y el espíritu del proyecto de ley.
- c) Podrán ser de supresión, modificación o de adición del proyecto de ley.
- d) Pretenden la sustitución de una parte del proyecto de ley.

- 13. Según la Ley 1/1993, de 10 de marzo, el Síndic de Greuges de las Illes Balears se relaciona con el Parlamento:**
- a) Mediante la Junta de Portavoces.
 - b) Mediante una comisión parlamentaria.
 - c) Mediante el oficial mayor.
 - d) Mediante el adjunto al Síndic de Greuges.
- 14. Corresponde al presidente de las Illes Balears, como representante ordinario del Estado en las Illes Balears:**
- a) Designar al representante de las Illes Balears en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
 - b) Promulgar, en nombre del rey, las leyes y ordenar su publicación oficial.
 - c) Ejercer las acciones judiciales, en caso de urgencia.
 - d) Firmar los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno y ordenar su publicación oficial.
- 15. El presidente de las Illes Balears no requiere deliberación previa del Consejo de Gobierno:**
- a) Para disolver el Parlamento y convocar anticipadamente elecciones.
 - b) Para plantear la cuestión de confianza ante el Parlamento.
 - c) Para solicitar dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
 - d) Para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
- 16. Según la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, corresponde al Consejo de Gobierno:**
- a) Aprobar, previa delegación del Parlamento, los decretos leyes.
 - b) Ejercer las facultades de coordinación de los consejos insulares.
 - c) Manifestar su criterio respecto de la toma en consideración de los proyectos de ley que le remita la Mesa del Parlamento.
 - d) Convocar las sesiones del Consejo de Gobierno.
- 17. El presidente de las Illes Balears requiere deliberación previa del Consejo de Gobierno:**
- a) Para encomendar transitoriamente, en caso de vacante, la titularidad de una consejería a otro miembro del Gobierno.
 - b) Para resolver los conflictos de atribuciones entre consejerías.
 - c) Para disolver de forma anticipada el Parlamento.
 - d) Para establecer la denominación y competencias de las consejerías.
- 18. Los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears son aquellos:**
- a) Que están formados por dos o más personas.
 - b) Que se crean por decreto del presidente del Gobierno.
 - c) Que pueden ejercer, entre otras, funciones administrativas de control o de decisión.
 - d) Que únicamente pueden ejercer funciones administrativas de deliberación y de asesoramiento.
- 19. El Consejo Consultivo de las Illes Balears será consultado preceptivamente:**
- a) En todo tipo de disposiciones reglamentarias del Gobierno.
 - b) En los proyectos de legislación delegada.
 - c) Previamente al planteamiento de conflictos negativos de competencia.
 - d) En todas las proposiciones de ley sometidas a debate y aprobación del Parlamento.
- 20. El mandato de los consejeros electos de los consejos insulares:**
- a) Puede finalizar anticipadamente, si así lo determina el Consejo Ejecutivo.
 - b) Finaliza el día anterior a la fecha en que se lleven a cabo las elecciones siguientes.
 - c) Finaliza el día en que se lleven a cabo las elecciones siguientes.
 - d) Puede finalizar anticipadamente, si así lo determina el presidente previa deliberación del Consejo Ejecutivo.

- 21. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:**
- a) El sector público instrumental administrativo está integrado por los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales.
 - b) El sector público instrumental empresarial está integrado por las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas.
 - c) El sector público instrumental fundacional está integrado por las fundaciones del sector público y los consorcios.
 - d) El sector público instrumental administrativo está integrado por los organismos autónomos, los consorcios y las agencias públicas.
- 22. Según el sistema de distribución de competencias establecido por el Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la submateria de coordinación de la sanidad privada con el sistema sanitario público se encuentra dentro de las competencias:**
- a) Exclusivas, previstas en el artículo 30 del Estatuto.
 - b) De desarrollo legislativo y ejecución, previstas en el artículo 31 del Estatuto.
 - c) Ejecutivas, previstas en el artículo 32 del Estatuto.
 - d) Inherentes al pleno ejercicio, previstas en el artículo 38 del Estatuto.
- 23. En relación con la adhesión de España a las comunidades europeas:**
- a) Se produjo el 1 de enero de 1985, con la firma del Tratado de Adhesión.
 - b) El Tratado de Adhesión se autorizó a través de la aprobación de una ley ordinaria.
 - c) Se produjo el 1 de enero de 1986.
 - d) Fue necesaria la previa reforma del artículo 13.2 de la Constitución para que se pudiese llevar a cabo la adhesión.
- 24. En relación con las instituciones de la Unión:**
- a) El Banco Central Europeo y el Comité de las Regiones son instituciones de la Unión desde el Tratado de Lisboa.
 - b) El Banco Central Europeo y el Consejo Europeo son instituciones de la Unión desde el Tratado de Lisboa.
 - c) El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones son instituciones de la Unión desde el Tratado de Maastricht.
 - d) El Consejo y el Consejo Europeo son instituciones de la Unión desde el Tratado de Maastricht.
- 25. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea:**
- a) Es un tribunal internacional al que no pueden acceder los particulares.
 - b) Tiene su sede en Luxemburgo.
 - c) Solo es competente si previamente se ha reconocido su jurisdicción.
 - d) Tiene su sede en Estrasburgo.
- 26. Los dictámenes de la Comisión:**
- a) Son actos típicos obligatorios.
 - b) Son actos típicos no obligatorios.
 - c) Tienen carácter vinculante para sus destinatarios.
 - d) Se publican siempre en el Diario Oficial de la Unión Europea.
- 27. Las directivas:**
- a) Siempre se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
 - b) Sirven para uniformizar la legislación de los 27 Estados miembros.
 - c) Se notifican cuando tienen como destinatarios a estados concretos.
 - d) Se notifican cuando tienen como destinatarios a estados y a particulares concretos, ya que tienen alcance general.

28. En caso de conflicto entre el derecho de la Unión y el derecho interno:

- a) Prevalece el derecho de la Unión y no se aplica el derecho interno.
- b) Prevalece el derecho interno y no se aplica el derecho de la Unión.
- c) Prevalece el derecho de la Unión y el derecho interno queda derogado automáticamente.
- d) Prevalece el derecho de la Unión y el derecho interno queda anulado automáticamente.

29. El procedimiento legislativo ordinario:

- a) Implica que las normas de derecho derivado las aprueba la Comisión.
- b) Implica que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo son colegisladores.
- c) Implica que el Parlamento Europeo y el Consejo son colegisladores.
- d) Implica que las normas de derecho derivado las aprueba el Parlamento Europeo.

30. La política europea de cohesión económica, social y territorial:

- a) Es una competencia exclusiva de la Unión Europea.
- b) Es una competencia compartida entre la Unión Europea y sus Estados miembros.
- c) Es una competencia complementaria de la Unión Europea.
- d) Es un ámbito en el que la Unión Europea, en aplicación del principio de subsidiariedad, debe coordinarse con los Estados miembros.

31. En relación con los principios de actuación regulados en el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale la afirmación incorrecta:

- a) Las personas sometidas a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013 guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
- b) Las personas sometidas a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013 pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
- c) Las personas sometidas a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013 ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la concreta finalidad para la que fueron otorgados, o con cualquier otra finalidad de interés público.
- d) Las personas sometidas a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013 no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.

32. De conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se registrarán:

- a) Por los principios de incompatibilidad absoluta, de responsabilidad, de publicidad, de unidad y de competencia.
- b) Por los principios de incompatibilidad parcial, de proporcionalidad, de publicidad y de competencia.
- c) Por los principios de compatibilidad absoluta, de responsabilidad, de publicidad, de unidad y de competencia.
- d) Por los principios de incompatibilidad relativa, de proporcionalidad, de publicidad, de unidad y de competencia.

33. A los efectos de lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se entiende por reutilización de la información:

- a) El derecho de los interesados en el procedimiento administrativo a no presentar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas.
- b) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por determinadas entidades del sector público con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público para la que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre dichos sujetos en el marco de sus actividades de servicio público.
- c) La excepción prevista al principio general de transparencia, según el cual las administraciones públicas no tienen la obligación de publicar en su página web la información que ya esté publicada en alguna otra página web, ya sea de una Administración pública o de cualquier entidad privada.
- d) El derecho de los interesados en el procedimiento administrativo a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

- 34. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones de transparencia:**
- a) Será comprensible, de acceso fácil y gratuito.
 - b) Será comprensible y de acceso fácil, aun pudiendo establecerse que el acceso sea de pago.
 - c) No es necesario que se suministre por medios o formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles para personas con discapacidad.
 - d) Solo excepcionalmente deberá ser publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web.
- 35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la aplicación de límites al derecho de acceso a la información pública:**
- a) Será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto.
 - b) No debe atender a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
 - c) Será meramente potestativa para el órgano administrativo que posea la información.
 - d) Será proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, pero sin necesidad de que esté justificada.
- 36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información pública solicitada contuviera datos personales que revelaran la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar:**
- a) En caso de que el afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
 - b) En caso de que se solicitase el consentimiento del afectado y este no contestara en el plazo de un mes.
 - c) En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, o en caso de que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
 - d) En caso de que se solicitase el consentimiento del afectado y este no contestara en el plazo de un mes, o en caso de que el afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
- 37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el registro electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:**
- a) Es único y común para todos los entes públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 113/2010. No obstante, mediante un decreto del Consejo de Gobierno se podrán crear registros electrónicos específicos cuando, en razón de la materia o de otras circunstancias, se justifique su necesidad.
 - b) Se aplica únicamente a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
 - c) Se aplica únicamente a los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
 - d) Se aplica únicamente a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- 38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las entidades sin personalidad jurídica:**
- a) Están en todo caso obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
 - b) En ningún supuesto pueden estar obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
 - c) Podrán elegir si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, pero una vez hayan elegido no podrán modificar su elección.
 - d) Podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas.

39. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

- a) El acceso a la sede electrónica requerirá siempre la utilización de alguna modalidad de firma electrónica.
- b) La información institucional y de los servicios incorporada en la sede electrónica será veraz y deberá ser actualizada cada cinco años.
- c) La sede electrónica contendrá un enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público que permitirá el acceso a los perfiles de contratante de todos los órganos de contratación incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 113/2010.
- d) No es necesario que la sede electrónica contenga el acceso al registro electrónico.

40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, entre el contenido mínimo que debe contener la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, no se encuentra:

- a) El inventario automatizado de todos los tipos de procedimientos administrativos que tramitan los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y los entes públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 113/2010.
- b) El mapa de la estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los entes públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 113/2020.
- c) La relación de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
- d) La versión consolidada de todas las disposiciones de carácter general dictadas por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos, el Catálogo de simplificación documental:

- a) Es la relación de documentos cuya obligación de aportación queda suprimida o sustituida por la presentación de una declaración responsable, teniendo en cuenta la posibilidad de la Administración de obtenerlos por medios telemáticos facilitados por la interoperabilidad de los sistemas.
- b) Es la relación de trámites que quedan suprimidos en determinados procedimientos para promover la celeridad en la tramitación administrativa.
- c) Es la relación de modelos de solicitudes a disposición del ciudadano para facilitar el inicio a instancias del interesado de los procedimientos administrativos.
- d) Es la relación de los objetivos del Gobierno de las Illes Balears en relación con los objetivos de simplificación administrativa.

42. De conformidad con el artículo 21 del Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos, la aportación diferida de documentación:

- a) No es posible.
- b) Es posible en los procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se podrá eximir a las personas interesadas de aportar inicialmente cualquier documento mediante la sustitución por una declaración responsable, sin perjuicio de la posterior presentación o acreditación de los documentos en el supuesto de obtener una propuesta de resolución favorable.
- c) Es posible en cualquier procedimiento administrativo, siempre que el ciudadano presente una declaración responsable, y sin perjuicio de que la aportación de la documentación sea posteriormente requerida discrecionalmente por la Administración.
- d) Es posible en cualquier procedimiento administrativo en el que se ejerciten potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para el ciudadano.

43. En base al contenido del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2021 por el que se aprueba el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿cuál de las siguientes acciones no está incluida dentro de la medida «Favorecer el acceso de más personas a la formación básica en materia de igualdad y programar formación específica según los colectivos destinatarios»?

- a) Destinar un presupuesto específico para la ejecución de la formación del Plan de Igualdad.
- b) Potenciar la formación del personal docente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) en materia de igualdad.
- c) Publicar información sobre el Plan de Igualdad en las redes sociales.
- d) Modificar la instrucción de selección de personal laboral temporal para incluir la valoración de la formación en materia de igualdad.

44. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Administración General del Estado comprende:

- a) La organización central (que integra los ministerios y los servicios comunes) y la Administración General del Estado en el exterior.
- b) La organización central (que integra los ministerios y los servicios comunes), la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior.
- c) La organización central (que integra los ministerios), la organización territorial (que integra los servicios comunes) y los delegados del Gobierno en las provincias.
- d) La organización central (que integra los ministerios) y la organización territorial (que integra los servicios comunes).

45. Señale la afirmación que es incorrecta. En relación con el concepto de Administración pública y sus características:

- a) Aunque existe una multiplicidad de administraciones públicas en el Estado español, todas las administraciones actúan bajo una sola personalidad jurídica que es común a todas estas.
- b) La Administración pública puede concebirse esencialmente como una estructura organizativa compleja a las órdenes del Gobierno y creada para la satisfacción de los intereses públicos.
- c) La Administración pública tiene una composición burocrática y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- d) La Administración pública actúa, como institución al servicio de los intereses generales, con pleno sometimiento al principio de legalidad.

46. La cláusula de supletoriedad del derecho estatal establecida en el artículo 149.3 de la Constitución española de 1978:

- a) Asegura la composición unitaria de un verdadero sistema jurídico nacional, no obstante su fraccionamiento en ordenamientos territoriales autonómicos.
- b) Debe aplicarse de forma extensiva, en cuanto que el derecho estatal siempre prima sobre el de las comunidades autónomas.
- c) Supone que el derecho estatal se aplica plenamente aunque exista una regulación autonómica de una determinada materia que le ha sido atribuida como competencia por el estatuto de autonomía.
- d) Supone la competencia permanente del Estado para dictar normas sobre cualesquiera materias atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas.

47. La cláusula de prevalencia del derecho estatal establecida en el artículo 149.3 de la Constitución española de 1978:

- a) Supone que las normas del Estado resultan en todo caso prevalentes (superiores) sobre las de las comunidades autónomas.
- b) Supone que las normas del Estado que entren en el ámbito autonómico garantizado por la Constitución se consideran válidas.
- c) No contiene ningún enunciado de superioridad natural del derecho estatal sobre el de las comunidades autónomas y supone la inaplicación de la norma autonómica.
- d) Supone que el Estado puede fijar libremente su propio ámbito de competencia, aun en perjuicio del de las comunidades autónomas.

48. Los colegios profesionales (por ejemplo, los colegios de médicos o los colegios de abogados):

- a) Son entidades privadas, sin que en ningún caso puedan ejercer responsabilidades públicas.
- b) Son entidades que forman parte de la llamada Administración institucional.
- c) Forman parte de las llamadas administraciones independientes.
- d) Son entidades que forman parte de la llamada Administración corporativa representativa de intereses económicos y profesionales.

49. En el ámbito de la Administración General del Estado, las administraciones independientes:

- a) Son entes institucionales creados para regular o supervisar ámbitos sociales económicos concretos (cuya naturaleza es normalmente la de actividades o servicios de interés general) desde una posición supuestamente independiente o neutral respecto a la Administración del Estado.
- b) Carecen de personalidad jurídica propia.
- c) No existen.
- d) Cuentan con órganos de gobiernos cuyos miembros pueden ser cesados en cualquier momento por el Consejo de Ministros.

50. Señale la respuesta correcta. En relación con la supremacía posicional de la Administración y el principio de autotutela:

- a) La Administración tiene la potestad de hacer ejecutar sus propias decisiones sin tener que contar para ello con la intervención de los tribunales, incluso mediante el empleo de la coacción en caso de resistencia de sus destinatarios.
- b) No cabe afirmar que la Administración tiene una posición de supremacía en las relaciones entre esta y los particulares, pues la Administración, al igual que los sujetos privados, está plenamente sujeta al derecho.
- c) La Administración precisa de la colaboración judicial para emitir cualquier declaración de derechos que altere situaciones jurídicas.
- d) El apremio sobre el patrimonio es la única manifestación legal del poder de autotutela de la Administración (esto es, el único medio de ejecución forzosa previsto en el ordenamiento jurídico).

51. En cuanto a las potestades de la Administración:

- a) El ejercicio de potestades discrecionales por la Administración es libre y exento de control judicial.
- b) La potestad de la Administración que no tiene origen en una norma es discrecional.
- c) Al atribuir una potestad reglada, la ley puede fijar sus condiciones de ejercicio de forma parcial y remitir la determinación de otras condiciones a la apreciación subjetiva, caso por caso, del órgano titular de la potestad.
- d) No hay potestades íntegramente discrecionales, pues hay elementos reglados que integran toda potestad (entre otros, la competencia).

52. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
- b) Las personas jurídicas podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas siempre que ello esté previsto en sus estatutos.
- c) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación.
- d) El apoderamiento apud acta realizado por comparecencia electrónica no es un medio válido de acreditación de la representación.

53. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) Las entidades locales no dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos.
- b) En caso de insuficiente acreditación de la representación, puede subsanarse el defecto en cualquier momento.
- c) La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
- d) Cada organismo no puede disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos, pues todos los apoderamientos tendrán que inscribirse en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

54. El real decreto ley:

- a) Puede regular el desarrollo de los derechos fundamentales.
- b) Es una norma que el Parlamento puede dictar «en caso de extraordinaria necesidad».
- c) Tiene valor reglamentario, pues es una norma dictada por el Gobierno.
- d) Es una norma que tiene carácter provisional, pues debe ser objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados.

55. Las leyes orgánicas:

- a) No pueden regular los estados de alarma, de excepción y de sitio.
- b) Pueden regular cualquier materia, incluido el régimen electoral general.
- c) Con carácter general, se relacionan con las leyes ordinarias en virtud del principio de competencia.
- d) La aprobación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

56. Señale la respuesta incorrecta. En cuanto a la potestad reglamentaria:

- a) Debe respetar el principio de eficiencia, de conformidad con el cual la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
- b) Está sujeta al principio de proporcionalidad, de conformidad con el cual la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
- c) Debe respetar los principios de necesidad y eficacia, de modo que la iniciativa normativa debe basarse en una identificación clara de los fines perseguidos, si bien no debe estar justificada por una razón de interés general.
- d) Debe respetar el principio de seguridad jurídica, de modo que la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

57. Señale la respuesta correcta. En relación con los reglamentos:

- a) Un reglamento dictado por el órgano incompetente no es ilegal siempre que dicho órgano tenga atribuida potestad reglamentaria para aprobar otras normas de rango reglamentario.
- b) Es un límite a la potestad reglamentaria el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- c) Los reglamentos no están sometidos a los principios generales del derecho, pues se someten únicamente a estos los actos administrativos.
- d) El principio de proporcionalidad no se aplica a la potestad reglamentaria estatal, de modo que la iniciativa normativa podrá contener cualquier regulación para atender a la necesidad a cubrir con la norma.

58. Señale la respuesta incorrecta. En cuanto a Administración pública y su organización:

- a) La potestad organizadora está sometida al control de los tribunales.
- b) Los principios de eficacia, jerarquía y coordinación resultan de aplicación a la actuación y la organización de la Administración pública.
- c) La Constitución española sanciona un modelo de Administración centralizado.
- d) La Administración se organiza y actúa con sujeción al derecho.

59. Señale la respuesta correcta. En cuanto a la organización administrativa:

- a) La organización de la Administración General del Estado en las unidades territoriales provinciales y autonómicas da lugar a la Administración periférica del Estado.
- b) Las comunidades autónomas no cuentan con una organización administrativa propia.
- c) La Administración local forma parte de la Administración General del Estado.
- d) No debe contar necesariamente con órganos situados lo más cerca posible del administrado (principio de desconcentración).

60. Señala la respuesta incorrecta. La Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

- a) Se aplica a las entidades de derecho público dependientes de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears cuando actúan en el ejercicio de potestades administrativas.
- b) Regula la organización y el funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el marco del régimen jurídico común a todas las administraciones públicas.
- c) Exige a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears una actuación objetiva y transparente, que facilite la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
- d) Debido a su ámbito de aplicación, no incluye entre los principios de actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el de descentralización.

61. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- a) Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan con sometimiento pleno únicamente a los principios generales del derecho.
- b) La racionalización y la agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión es un principio de aplicación a la actuación de las administraciones públicas.
- c) El principio de simplicidad no rige la actuación de las administraciones públicas.
- d) Se excluye la aplicación del principio de cooperación, colaboración y coordinación de las relaciones entre la Administración pública y los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma.

62. Señale la respuesta incorrecta. En relación con los órganos administrativos:

- a) La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica.
- b) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
- c) Los órganos administrativos se crean, se modifican o se suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
- d) La creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.

63. Señale la respuesta incorrecta en relación con los órganos administrativos:

- a) No existen órganos unipersonales, pues el titular de un órgano administrativo nunca puede ser una única persona física.
- b) Son órganos colegiados aquellos cuya titularidad corresponde a un conjunto de personas físicas ordenadas horizontalmente, de modo que todas ellas concurren, de modo colectivo, a formar la voluntad u opinión del órgano.
- c) La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, entre otros requisitos, la determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- d) El acuerdo de creación de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberá ser publicados en el boletín o diario oficial de la administración pública en la que se integran.

64. En cuanto a la delegación de competencias:

- a) Los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas únicamente en otros órganos de la misma Administración que sean jerárquicamente dependientes.
- b) Los órganos de la Administración General del Estado no pueden delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes.
- c) Toda competencia puede ser objeto de delegación, incluso la competencia relativa a la adopción de disposiciones de carácter general.
- d) En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante.

65. En cuanto a las técnicas de alteración del ejercicio de la competencia administrativa:

- a) La avocación puede realizarse sin acuerdo motivado.
- b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de derecho público de distintas administraciones, se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre estas, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o, en su caso, cabildos o consejos insulares, que se regiran por la legislación de régimen local.
- c) Los órganos inferiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda a sus órganos superiores, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
- d) Las encomiendas de gestión pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

66. De conformidad con el artículo 78 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los convenios y acuerdos de cooperación entre la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con otras comunidades autónomas:

- a) Están expresamente prohibidos en todo caso.
- b) No son posibles, pues los convenios y los acuerdos de cooperación son únicamente posibles con la Administración General del Estado.
- c) No son posibles, pues los convenios y los acuerdos de cooperación son únicamente posibles con las entidades locales.
- d) Podrán suscribirse para la gestión y la prestación de servicios propios de competencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

67. Señale la respuesta incorrecta. En relación con las clases de actos administrativos:

- a) La distinción entre actos que ponen fin o no a la vía administrativa posee significación en relación con la posibilidad de interponer contra los mismos los siguientes recursos administrativos: recurso de alzada o recurso de reposición.
- b) Son actos declarativos los que enuncian una situación preexistente, dotándola de eficacia.
- c) La distinción entre actos administrativos resolutorios y actos administrativos de trámite es relevante, pues los actos de trámite nunca pueden ser impugnados.
- d) Los actos pueden ser simples o complejos en función del número de entes u órganos que participan en su emisión.

68. Señale la respuesta incorrecta. En cuanto al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

- a) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
- b) La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
- c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

69. Señale la respuesta correcta en relación con la ejecución forzosa del acto administrativo. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) Las administraciones públicas podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos sin previo apercibimiento.
- b) Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las administraciones públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
- c) La ejecución forzosa del acto administrativo siempre procede, toda vez que el acto es inmediatamente ejecutivo y en ningún caso cabe la suspensión de su ejecución.
- d) La ejecución forzosa de un acto administrativo no puede efectuarse por la Administración mediante la compulsión sobre las personas, pues se trata de un medio restrictivo de la libertad individual.

70. En cuanto al procedimiento administrativo, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- b) No cabe la apertura de un período de información o actuaciones previas con anterioridad al inicio del procedimiento.
- c) La petición razonada de otros órganos administrativos que no tienen competencia para iniciar el procedimiento vincula al órgano competente para iniciarlo.
- d) Un convenio no puede tener la consideración de acto finalizador de un procedimiento administrativo.

71. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) Las administraciones públicas podrán adoptar en cualquier momento la declaración de lesividad para el interés público de actos anulables favorables para los interesados.
- b) Las administraciones públicas podrán declarar de oficio la nulidad de actos, entre otros requisitos, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere.
- c) Las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
- d) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

72. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) Los convenios que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento ponen fin a la vía administrativa.
- b) El órgano competente para resolver el recurso de alzada es el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución o el acto objeto del recurso.
- c) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición.
- d) Contra los actos firmes en vía administrativa no cabe interponer ningún recurso administrativo.

73. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, el procedimiento ordinario contencioso-administrativo se inicia:

- a) Mediante un escrito reducido a citar la disposición, el acto, la inactividad o la actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.
- b) Mediante un escrito de demanda.
- c) Mediante una vista preliminar.
- d) Mediante un recurso de alzada.

74. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativas al procedimiento ordinario de elaboración de las disposiciones de carácter general es incorrecta. Según la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears:

- a) Los trámites de audiencia y de información pública se pueden impulsar de forma simultánea.
- b) Se podrá prescindir del trámite de información pública en el supuesto de normas organizativas.
- c) El proyecto de reglamento se someterá preceptivamente al informe de evaluación de impacto de género, en los términos que prevé la normativa sobre igualdad.
- d) No debe elaborarse una memoria del análisis de impacto normativo, que únicamente se exige para la elaboración de anteproyectos de ley.

75. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativa al procedimiento general de expropiación forzosa es incorrecta. De conformidad con la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954:

- a) El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio.
- b) El acuerdo de necesidad de ocupación puede recurrirse en alzada por los interesados en el procedimiento expropiatorio y dicho recurso surtirá efectos suspensivos hasta que se dicte la resolución expresa.
- c) No se admite declaración implícita de utilidad pública previa a la expropiación de bienes inmuebles.
- d) Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación, se procederá a determinar su justo precio.

76. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial de la Administración, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, empezará a computarse:

- a) Desde que se inicia el daño.
- b) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
- c) Desde que termina de producirse el daño.
- d) Desde que se produce la primera visita médica.

77. En relación con la potestad sancionadora de la Administración, señale la respuesta incorrecta:

- a) Las sanciones administrativas en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
- b) Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario.
- c) Solo podrá ser sancionado por hechos constitutivos de infracción administrativa quien resulte responsable de los mismos a título de dolo, pero no de culpa.
- d) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

78. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, tienen la consideración de contratos administrativos:

- a) Los contratos de obra siempre que se celebren por una administración pública.
- b) Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de administraciones públicas.
- c) Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.
- d) Todos los contratos de servicios, suministro y servicios.

79. Señale la respuesta incorrecta en relación con los procedimientos de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- a) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.
- b) En los procedimientos con negociación, la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos.
- c) En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.
- d) En el procedimiento simplificado abreviado, la oferta se presentará en un único sobre si no se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; en caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres.

80. Señale la respuesta correcta en relación con las prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- a) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros requerirán de dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.
- b) Los acuerdos relativos a las prerrogativas de la Administración pública en los contratos públicos se adoptan sin audiencia al contratista.
- c) La declaración de la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato no es una prerrogativa de la Administración Pública.
- d) La determinación de los efectos de la resolución del contrato no es una prerrogativa de la Administración pública.

81. Señala la respuesta incorrecta. Los convenios a que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- a) Deberán incluir mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
- b) Deben acompañarse de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
- c) Pueden resolverse por el acuerdo unánime de todos los firmantes.
- d) Deberán incluir el plazo de vigencia que, con carácter general, no podrá ser superior a un año.

82. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas:

- a) El patrimonio de las administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.
- b) Como regla general, los bienes y derechos de la Administración General del Estado se entienden adquiridos con el carácter de demaniales.
- c) No se entenderán incluidos en el patrimonio de las administraciones públicas los recursos que constituyen la tesorería de las entidades públicas empresariales.
- d) La inalienabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad son principios aplicables a la gestión y la administración de los bienes y derechos demaniales.

83. La llamada gestión indirecta de un servicio público:

- a) Supone que la recepción del servicio por el ciudadano está sujeta al pago de algún tipo de tasa o precio público.
- b) Supone que el servicio es prestado en colaboración con otra administración pública que no es la titular del servicio.
- c) Es la que se realiza, por ejemplo, a través de una entidad pública empresarial.
- d) Es la que se realiza, por ejemplo, a través de un contrato de concesión de servicios.

84. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:

- a) Con carácter general, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva legitima al interesado para entender estimada por silencio administrativo su solicitud de concesión de la subvención.
- b) La reformulación de solicitudes puede no respetar los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
- c) No procede la concesión directa de subvenciones.
- d) Se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, y siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras.

85. Señale la respuesta incorrecta sobre la justificación de las subvenciones. De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:

- a) En la rendición de la cuenta justificativa deben incluirse, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
- b) La acreditación de los gastos podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
- c) Con carácter general, el plazo máximo de rendición de la cuenta justificativa es de un año desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
- d) La justificación insuficiente de la subvención es causa de reintegro.

86. Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Según el artículo 36 del Reglamento, el responsable consultará a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos en virtud del artículo 35 muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo.
- b) Según el artículo 83 del Reglamento, al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta, entre otros elementos, la naturaleza de la infracción.
- c) El artículo 17 del Reglamento regula el derecho de rectificación.
- d) Según el artículo 82 del Reglamento, toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

87. Los órganos competentes en materia de función pública en la CAIB, según el artículo 4 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears:

- a) Son órganos ejecutivos y órganos consultivos.
- b) Son órganos ejecutivos y órganos de control.
- c) Son órganos ejecutivos, órganos consultivos y órganos de control.
- d) Son órganos ejecutivos, órganos consultivos, órganos de control y órganos de solución de conflictos.

88. Según el artículo 60 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la jubilación de los funcionarios:

- a) Puede ser voluntaria o por incapacidad permanente.
- b) Puede ser voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente.
- c) Puede ser voluntaria o forzosa.
- d) Solo puede producirse de forma voluntaria.

89. Según el artículo 66 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el grado personal superior al adquirido se consolida:

- a) Por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción.
- b) Por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante tres años continuados o cuatro con interrupción.
- c) Por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante un año y medio continuado, o dos y medio con interrupción.
- d) Por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años y medio continuados.

90. Según el artículo 132 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en materia de responsabilidad disciplinaria del personal al servicio de la Administración de la CAIB:

- a) La clasificación de las faltas y la aplicación de las sanciones guardarán relación con la gravedad de los daños causados.
- b) La clasificación de las faltas y la aplicación de las sanciones guardarán relación con la gravedad de los daños causados y con el grado de intencionalidad de la conducta.
- c) La clasificación de las faltas y la aplicación de las sanciones guardarán relación con la gravedad de los daños causados, el grado de intencionalidad de la conducta y el grado de participación de la persona responsable.
- d) La clasificación de las faltas y la aplicación de las sanciones guardarán relación con la gravedad de los daños causados, el grado de intencionalidad de la conducta, el grado de participación de la persona responsable y la eventual reiteración.

91. Según el artículo 85 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, los convenios colectivos:

- a) Pueden regular materias de índole económica, laboral y sindical, pero no cualquier materia que afecte a las condiciones de empleo.
- b) Pueden regular materias de índole económica, laboral y sindical y cualquier materia que afecte a las condiciones de empleo.
- c) No pueden regular materias de índole económica, pero sí materias de índole laboral, sindical y cualquier materia que afecte a las condiciones de empleo.
- d) Pueden regular exclusivamente materias de índole laboral y sindical.

92. Según el artículo 14 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, el periodo de prueba:

- a) Tiene una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para los demás trabajadores, salvo que el convenio colectivo establezca otra duración diferente, que puede ser mayor o menor.
- b) Tiene una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para los demás trabajadores.
- c) Tiene una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para los demás trabajadores, salvo que el convenio colectivo establezca una duración menor.
- d) Tiene una duración máxima de seis meses.

93. Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la efectividad de las medidas preventivas adoptadas por la empresa:

- a) Deberá prever las imprudencias temerarias de los trabajadores.
- b) Deberá prever las imprudencias no temerarias de los trabajadores.
- c) Deberá prever las acciones dolosas de los trabajadores.
- d) Deberá prever los criterios que se acuerden en la empresa en el seno del Comité de Seguridad y Salud.

94. Según el artículo 7 del Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, los estudiantes:

- a) No están incluidos en el campo de aplicación del sistema de Seguridad Social.
- b) Están incluidos en el campo de aplicación del sistema de Asistencia Social.
- c) Están incluidos en el sistema de Seguridad Social, en el ámbito de la protección no contributiva.
- d) Están incluidos en el sistema de Seguridad Social, en el ámbito de la prestación contributiva.

95. En relación con el delito de prevaricación administrativa:

- a) En caso de resolución prevaricadora adoptada por un órgano colegiado, incurren en el delito todos los miembros del mismo, incluso aquellos que han formulado voto particular en contra de la resolución.
- b) No da lugar a pena de inhabilitación, pena que solo se aplica a la prevaricación judicial.
- c) Solo puede apreciarse este delito en función del contenido sustantivo de la resolución, de modo que no puede dar lugar a prevaricación la omisión de meros trámites procedimentales (por muy relevantes que sean).
- d) El elemento típico de la arbitrariedad de la resolución se entiende como su incompatibilidad completa e incuestionable con el ordenamiento jurídico, de modo que no basta con la mera ilegalidad.

96. La elaboración de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears debe enmarcarse en:

- a) Un plan presupuestario a medio plazo, que debe incluir un mínimo de tres años, con el fin de garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- b) Un plan a medio plazo, que debe incluir un mínimo de cinco años, con el fin de garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- c) Un plan presupuestario, que debe ser aprobado por el consejero competente en materia de presupuestos.
- d) Un plan presupuestario aprobado en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de las Illes Balears.

97. El principio de no afectación significa:

- a) Que los ingresos públicos no pueden afectar situaciones particulares ya consolidadas.
- b) Que los ingresos públicos deben destinarse siempre a satisfacer el conjunto de las obligaciones económicas.
- c) Que los ingresos públicos deben destinarse a satisfacer el conjunto de las obligaciones económicas, a menos que por ley se establezca la afectación a finalidades determinadas.
- d) Que los ingresos públicos están afectados a cada uno de los gastos públicos para los que están previstos.

98. Forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a efectos de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

- a) La Universidad de las Illes Balears.
- b) El Parlamento de las Illes Balears.
- c) Los consejos insulares y todas las entidades locales de las Illes Balears.
- d) Los organismos autónomos dependientes de cualquier administración pública de las Illes Balears.

99. El plan presupuestario a medio plazo, que se incluirá en el programa de estabilidad que elabore el Gobierno del Estado, y la regla del gasto, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, debe ser aprobado:

- a) Por el Parlamento.
- b) Por la Intervención General.
- c) Por el Gobierno de las Illes Balears.
- d) Por el consejero competente en materia de presupuestos.

100. El principio de especialidad cuantitativa significa:

- a) Que los créditos consignados en el estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tienen carácter limitativo y, en consecuencia, no es posible autorizar gastos por una cuantía superior al importe de dichos créditos.
- b) Que los créditos consignados en el estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears no tienen carácter limitativo y, en consecuencia, es posible autorizar gastos por una cuantía superior al importe de dichos créditos.
- c) Que todos los créditos deben destinarse a la finalidad específica para la que han sido autorizados.
- d) Que los créditos para gastos deben destinarse a cubrir necesidades de financiación.

101. La tramitación de un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito solo será posible cuando:

- a) Por razones de urgencia e interés público deba efectuarse un gasto inaplazable hasta el ejercicio siguiente.
- b) Por razones de urgencia e interés público deba efectuarse un gasto inaplazable hasta el ejercicio siguiente y siempre que lo apruebe el Consejo de Gobierno previa autorización parlamentaria.
- c) Por razones de urgencia e interés público deba efectuarse un gasto inaplazable hasta el ejercicio siguiente y siempre que lo apruebe el Consejo de Gobierno previa autorización del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.
- d) El presupuesto se encuentre prorrogado.

102. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las funciones de ordenador general de los pagos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los organismos autónomos y del resto de entidades integrantes de la hacienda pública autonómica corresponden al director general competente en materia de tesorería.
- b) Únicamente le corresponden al director general competente en materia de tesorería las funciones de ordenador general de los pagos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- c) Le corresponden siempre al director general competente en materia de tesorería las funciones de ordenador general de los pagos de todo tipo de consorcios.
- d) La disposición material de los pagos debe efectuarse necesariamente siempre con la firma del director general competente en materia de tesorería.

103. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

- a) El presupuesto de cada ejercicio se cerrará, en cuanto al reconocimiento de derechos y de obligaciones, el día 31 de diciembre de cada ejercicio, siempre que se correspondan con ingresos liquidados y con gastos realizados hasta el día 31 de diciembre del mismo ejercicio.
- b) El presupuesto de cada ejercicio se cerrará, en cuanto al reconocimiento de derechos y de obligaciones, el día previsto en la propia Ley de presupuestos.
- c) El presupuesto se cerrará el día 31 de diciembre solo por lo que respecta a los derechos liquidados.
- d) El presupuesto se cerrará el día 31 de diciembre solo por lo que respecta a las obligaciones reconocidas.

104. Respecto del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, es cierto:

- a) Que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears puede recurrir al endeudamiento de acuerdo con lo previsto, exclusivamente, en el artículo 132 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears.
- b) Que el importe máximo de variación del saldo de deuda viva del ejercicio viene fijado únicamente en la ley de presupuestos generales de cada año.
- c) Que para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para emitir deuda pública es necesario, en todo caso, la autorización del Estado.
- d) Que para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para emitir deuda pública es necesario, en todo caso, la autorización del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.

105. Los impuestos son:

- a) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio como consecuencia de la realización de obras públicas.
- b) Los tributos cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
- c) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.
- d) Los únicos ingresos públicos coactivos.

106. Las liquidaciones tributarias:

- a) Deben ser notificadas siempre y en todo caso, sin excepciones.
- b) Los supuestos en los que no será preceptiva su notificación expresa se determinarán siempre por una norma de rango legal.
- c) Los supuestos en los que no será preceptiva su notificación expresa podrán establecerse reglamentariamente.
- d) En ningún caso deben ser motivadas.

107. Respecto del aplazamiento y fraccionamiento del pago, es cierto:

- a) Que las deudas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento.
- b) Que las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
- c) Que solo puede presentarse una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario.
- d) Que las deudas tributarias no pueden ser objeto de aplazamiento ni fraccionamiento salvo casos de fuerza mayor.

108. En relación con los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, es cierto:

- a) Que se entiende efectuada la cesión cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto de autonomía y con el alcance y condiciones que establezca una ley específica de cesión.
- b) Que son tributos establecidos y regulados por el Estado y por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears conjuntamente.
- c) Que solo pueden ser cedidos los impuestos personales sobre la renta.
- d) Que el impuesto sobre el valor añadido está cedido totalmente.

109. Si un contribuyente no está conforme con una liquidación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears y pretende su impugnación, ¿cuáles son las opciones que tiene?

- a) Puede interponer un recurso de reposición potestativo y previo a la reclamación económico-administrativa, o bien, directamente, una reclamación económico-administrativa.
- b) Puede interponer simultáneamente el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa.
- c) Solo puede acudir a la jurisdicción contenciosa.
- d) Solo puede interponer un recurso de reposición si previamente ha obtenido una declaración de nulidad.

110. La función interventora tiene por objeto:

- a) Controlar, antes de su aprobación, todos los actos que puedan dar lugar al reconocimiento de derechos o de obligaciones de contenido económico, así como los cobros y los pagos que de estos se deriven, y la inversión y la aplicación en general de los fondos públicos y las modificaciones presupuestarias, para asegurar que estos actos se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso.
- b) Controlar, antes de su aprobación, todos los actos que puedan dar lugar al reconocimiento de derechos o de obligaciones de contenido económico, así como los cobros y los pagos que de estos se deriven.
- c) Controlar, antes y después de su aprobación, todos los actos que puedan dar lugar al reconocimiento de derechos o de obligaciones de contenido económico, así como los cobros y los pagos que de estos se deriven, y la inversión y la aplicación en general de los fondos públicos y las modificaciones presupuestarias, para asegurar que estos actos se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso.
- d) Realizar el control financiero para promover la mejora de las técnicas y de los procedimientos de gestión económico-financiera.

- 111. Indique la respuesta incorrecta. En materia de enseñanza universitaria, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene competencia, sin perjuicio de la autonomía universitaria:**
- a) En la programación y la coordinación del sistema universitario.
 - b) En la financiación propia de las universidades.
 - c) En la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos.
 - d) En la gestión del sistema propio de becas y ayudas.
- 112. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, tiene por objeto:**
- a) La regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal, autonómico y local.
 - b) Solo la regulación del régimen presupuestario del sector público estatal.
 - c) El régimen jurídico de la contabilidad, la intervención y el control financiero del sector público estatal.
 - d) La regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal.
- 113. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto:**
- a) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
 - b) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
 - c) Inadmitirá directamente las actuaciones, debiendo motivar su decisión.
 - d) Inadmitirá las actuaciones previa audiencia del interesado, debiendo motivar su decisión.
- 114. Las leyes que regulen los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título primero de la Constitución serán tuteladas:**
- a) Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en la preferencia y sumariedad.
 - b) A través del recurso de inconstitucionalidad.
 - c) A través del recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.
 - d) Mediante la cuestión prejudicial.
- 115. En relación con las competencias que, de acuerdo con el Estatuto de autonomía, los consejos insulares hayan asumido como propias:**
- a) El Gobierno balear no tiene ninguna potestad reglamentaria.
 - b) El Gobierno balear podrá establecer los principios generales sobre la materia, garantizando el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de los consejos insulares.
 - c) El Gobierno balear podrá ejercer la potestad reglamentaria sin ningún límite.
 - d) Los consejos insulares podrán ejercer la potestad reglamentaria sin ningún límite.
- 116. El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo:**
- a) Ante el rey.
 - b) Ante las mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente.
 - c) Ante el Gobierno.
 - d) Ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
- 117. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea:**
- a) Está formado por 54 jueces y 11 abogados generales.
 - b) Está formado por 27 jueces y no hay abogados generales.
 - c) Está formado por 54 jueces y no hay abogados generales.
 - d) Está formado por 27 jueces y 11 abogados generales.

118. Señale la respuesta incorrecta. En relación con el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general regulado en la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears:

- a) Los textos consolidados de reglamentos se aprobarán siguiendo los trámites del procedimiento ordinario.
- b) El consejero competente puede acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración normativa cuando se den circunstancias excepcionales debidamente acreditadas que requieran la aprobación y la entrada en vigor urgente de la disposición.
- c) El consejero competente para el inicio del procedimiento ordenará la sustanciación de una consulta pública a través del sitio web, con la finalidad de que la ciudadanía tenga la posibilidad de emitir su opinión durante un plazo no inferior a diez días.
- d) El proyecto de reglamento se somete al trámite de consulta de las consejerías de la Administración autonómica, por medio de las secretarías generales, cuando resulte conveniente a criterio del órgano responsable de la tramitación del procedimiento.

119. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) Los patrimonios independientes no tienen en ningún caso capacidad de obrar ante las administraciones públicas.
- b) Tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas los menores de edad para el ejercicio y la defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, la tutela o la curatela.
- c) Tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados.
- d) No tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y la defensa de los derechos o intereses de que se trate.

120. Se encuentran incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

- a) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes de estas, salvo las universidades públicas.
- b) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen, directamente o indirectamente, administraciones públicas en al menos un 20 %.
- c) La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, quedando excluidas, por tanto, las entidades que integran la Administración local.
- d) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo.